



República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público

**JUZGADO CINCUENTA Y NUEVE DE PEQUEÑAS CAUSAS Y  
COMPETENCIA MÚLTIPLE DE BOGOTÁ**  
(ACUERDO PCSJA18-11127 Octubre 12 de 2018)

Bogotá D.C., dieciocho (18) de abril del dos mil veinticuatro (2024)

Radicado: **2023 01463**

Procede el Despacho a decidir el recurso de reposición, y lo pertinente frente al de apelación, propuesto por el apoderado de la parte demandante contra el auto proferido el 24 de octubre de 2023, mediante el cual se negó el mandamiento de pago

**FUNDAMENTOS DEL RECURSO**

Señala el recurrente que en el presente asunto no se debió negar el mandamiento de pago ya que el título aportado (promesa de compraventa), cumple los requisitos del artículo 422 del C.G. del P.

En efecto, advierte que, debido al incumplimiento de la cláusula quinta, se hace efectiva la clausula novena y por ende la solicitud de librar mandamiento de pago.

**CONSIDERACIONES**

1. El proceso civil está diseñado para que las partes puedan controvertir las decisiones adoptadas por los órganos judiciales en aras de permitir que las mismas puedan ser modificadas o revocadas cuando se argumentan errores en ellas, actuaciones que se pueden realizar a través de los mecanismos dispuestos en el estatuto procesal general.

El recurso de reposición conforme al artículo 318 del C.G. del P. “*procede contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de súplica y contra los de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se reformen o revoquen.*”, contempla además la norma en comento, que “*El recurso deberá interponerse con expresión de las razones que lo sustenten, en forma verbal inmediatamente se pronuncie el auto. Cuando el auto se pronuncie fuera de audiencia el recurso deberá interponerse por escrito dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación del auto.*”; Así las cosas y como quiera

que el recurrente formuló su oposición dentro del término para ello, se impone para el Despacho proceder a resolverlo.

2. Como primera medida, importa precisar que, en cuanto al proceso ejecutivo, no en vano se pregona que el mismo tiene su razón en la certidumbre, pues su objeto no es declarar derechos dudosos o controvertidos, sino hacer efectivos los que ya están declarados o reconocidos por las partes en un negocio jurídico unilateral o bilateral. Luego, si la obligación ya está plenamente reconocida por el deudor, éste debe atenderla en su debida oportunidad, por lo que se acude a la autoridad jurisdiccional, en procura del cumplimiento forzado de la obligación, cuando el obligado no cumple la prestación que debe ejecutar.

Ahora, el presupuesto para el ejercicio de la acción compulsiva es la existencia formal y material de un documento o conjunto de documentos que contengan los requisitos de título ejecutivo, de los cuales se derive la certeza del derecho del acreedor y la obligación correlativa del deudor, es decir, lo que le permite al primero reclamar del segundo el cumplimiento de la obligación resultante del documento. El documento idóneo debe incorporarse con la demanda, pues constituye la columna vertebral del proceso, de donde se sigue que, sin su presencia, no puede librarse el mandamiento ejecutivo, por ser un presupuesto indispensable de la ejecución forzada. Al respecto, el artículo 430 del C.G.P, dispone que: “presentada la demanda acompañada de documento que preste merito ejecutivo, el juez librara mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal”.

Frente a las características de los titulo ejecutivo encontramos que aquellos deben gozar de dos tipos de condiciones: formales y sustanciales. Las primeras exigen que el documento o conjunto de documentos que dan cuenta de la existencia de la obligación, (i) sean auténticos y (ii) emanen del deudor o de su causante, de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, o de un acto administrativo en firme.

Determina el artículo 422 del Código General del Proceso que podrán demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos provenientes del deudor o de su causante y que constituyan plena prueba contra él, o estén contenidas en decisiones judiciales o administrativas con fuerza ejecutiva.

Respecto a la exigibilidad se ha manifestado que tiene que: *“ver con la circunstancia de que pueda demandarse el pago o cumplimiento de ella, lo cual corrientemente ocurre cuando ha vencido el plazo o se ha cumplido la condición a la que estaba sujeta”*<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Bejarano Guzmán ¿, R, Procesos Declarativos, ejecutivos y arbitrales 5ª ed. Edit Temis Bogotá 2011

3. La cláusula penal, aparece regulada en los artículos 1592 a 1601 del Código Civil para los asuntos civiles, y para los comerciales por aquellas disposiciones en concordancia con lo dispuesto en los artículos 867 y 822 del Código de Comercio.

De cara a lo aquí solicitado, la cláusula penal es una obligación que se entiende condicionada al hecho de incumplimiento de alguna de las partes contractuales, resulta necesario que se pruebe el acaecimiento de la condición para que sea exigible, como lo dispone el artículo 1542 del C.C., *“no puede exigirse el cumplimiento de la obligación condicional sino verificada la condición totalmente”*. En esa misma línea el artículo 427 del CGP impone que para la ejecución de una obligación condicional debe *“acreditarse el cumplimiento de la condición suspensiva cuando la obligación estuviere sometida a ella”*.

Respecto al tema la Honorable Corte Suprema se ha pronunciado:

*“Preciso es relieves que las obligaciones de la promesa pueden no sólo dirigirse a la celebración del negocio prometido, pues es posible pactar anteladamente, como en este caso, cancelaciones anticipadas o lo relativo a la entrega de los bienes ofrecidos en venta; sin embargo, lo referente al cumplimiento de dichos deberes, los cuales subsisten luego de agotarse la finalidad del convenio prometido, generan vías especiales para su reclamación y, en lo atinente a este asunto, bien puede advertirse que un trámite ejecutivo no se muestra como idóneo, pues existe amplia discusión en torno a la satisfacción del compromiso de pago adquirido por la aquí querellante”*. (Sentencia de 4 de noviembre de 2015. M.P. Dr. Luis Armando Tolosa Villavona)

Acerca del entendimiento, alcances y utilidad de la cláusula penal en sí, la Corte Suprema de Justicia Sala Casación Civil, ha sostenido:

La evaluación convencional de los perjuicios o cláusula penal según la ley *“es aquella en que una persona para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena que consiste en dar o hacer algo en caso de no ejecutar o retardar la obligación principal (C.C. art. 1592). Este concepto pone de manifiesto que la pena convencional puede cumplir diversidad de funciones, tales como la de servir de apremio al deudor, de garantía o caución, o de estimación anticipada de los perjuicios”*.

*“Ahora, la estipulación de una cláusula penal en un contrato le concede al acreedor un conjunto de ventajas, pues en primer término lo libera de la difícil labor de aportar la prueba sobre los perjuicios, porque hay derecho a exigir el pago de la pena establecida por el solo hecho de incumplirse la obligación; en segundo lugar, el incumplimiento de la obligación principal hace presumir la culpa del deudor, y por esta circunstancia, el acreedor también queda exonerado de comprobar dicha culpa (C. C. art. 1604); en tercer lugar, evita controversia sobre la cuantía de los perjuicios sufridos por el acreedor”*.

Para evitar un doble pago de la obligación, en principio no puede exigir el acreedor, a la vez, la obligación principal y la pena (Art. 1594 del C.C);

tampoco puede solicitar el cúmulo de la pena y la indemnización ordinaria de perjuicios, porque ello entrañaría una doble satisfacción de los mismos, salvo que así se haya estipulado, o que la pena convenida sea de naturaleza moratoria, pues en uno y otro evento sí puede pedirse acumuladamente tales reclamaciones (Art. 1600 del C. C).<sup>2</sup>

Por lo tanto, no se desconoce que la obligación principal de un contrato de promesa de compraventa es la firma de la escritura pública que transfiere el bien inmueble.

Ahora bien, revisado el presente asunto y bajo los anteriores apuntalamiento jurisprudenciales y normativos, se evidencia que nos encontramos frente a un título complejo, del cual se desprende obligaciones mutuas y recíprocas entre las partes, del cual no se puede pregonar que existe incumplimiento del extremo procesal demandado en los términos presentados y solicitados, para solicitar la ejecución de la cláusula penal como lo pretende el censor.

Pues aparte de que se requiere prueba y declaración que la demandada es una contratante incumplida, la aludida clausula penal sobre la que se pretende su ejecución, no contiene una obligación clara, expresa y exigible como lo impone el artículo 422 del Código General del Proceso, en especial a la fecha de exigibilidad de dicho aparte.

**VENDEDORA. CLAUSULA NOVENA- CLAUSULA PENAL:** Las partes convienen acordar una cláusula penal equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato de compra-venta, como sanción por incumplimiento de cualquiera de las partes, la parte incumplida perderá tal suma como factor valorativo de perjuicios a favor de la parte cumplida o de la allanada a cumplir, y se dará por terminado el presente contrato sin necesidad de declaración judicial ni privada. **CLAUSULA DECIMA-GASTOS NOTARIALES:** Los gastos notariales que se causen en razón

Situaciones las anteriores, son suficiente para mantener la decisión de negar la orden de pago.

Por lo expuesto, el Juzgado Cincuenta y Nueve de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá D.C.,

**RESUELVE:**

**Primero.** No Reponer el auto de 24 de octubre de 2023 por medio del cual se negó mandamiento de pago.

**NOTIFÍQUESE<sup>3</sup>**

<sup>2</sup> H. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de octubre 7 de 1976

<sup>3</sup> Decisión anotada en el estado No. 056 de fecha 19 de abril de 2024

**Firmado Por:**  
**Jaiver Andres Bolivar Paez**  
**Juez**  
**Juzgado Municipal**  
**Civil 077**  
**Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,  
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **5b4e0f9b1a7b1eb7790193c7141e3d874f259a37f15929c678485439dcc17579**

Documento generado en 18/04/2024 06:30:41 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**